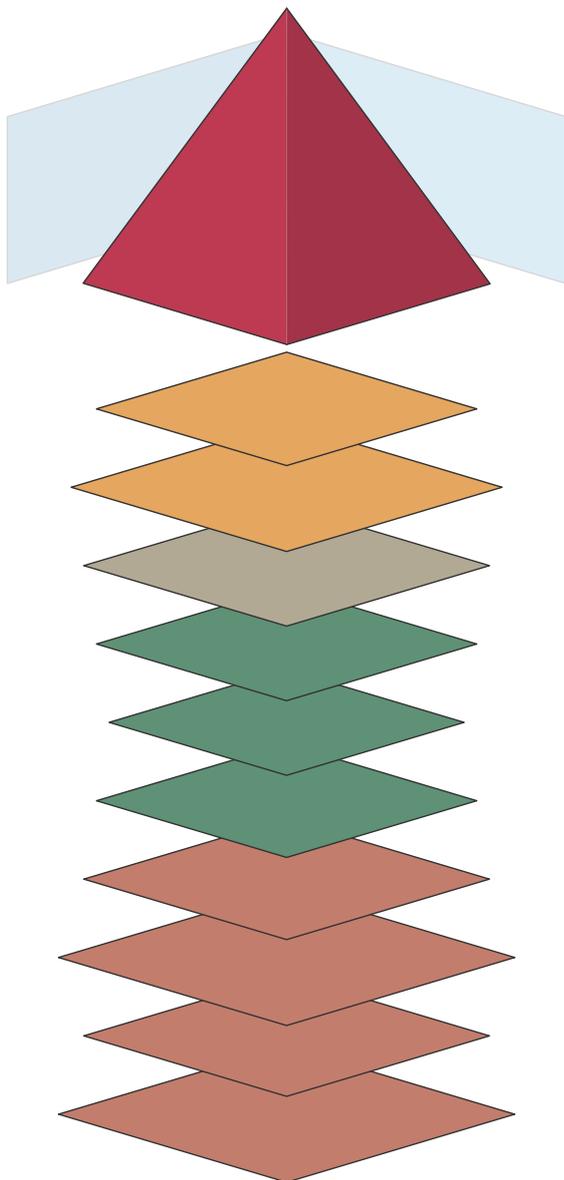


 **MÉXICO**



 **7,56**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

4.º de 193 países
2.º de 35 países americanos
1.º de 8 países de América Central

 **MERCADOS CRIMINALES** **8,00**

TRATA DE PERSONAS	7,50
TRÁFICO DE PERSONAS	8,50
TRÁFICO DE ARMAS	8,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	7,50
DELITOS CONTRA LA FAUNA	7,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	7,50
COMERCIO DE HEROÍNA	8,00
COMERCIO DE COCAÍNA	9,00
COMERCIO DE CANNABIS	8,00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	9,00

 **ACTORES CRIMINALES** **7,13**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	9,00
REDES CRIMINALES	9,00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	7,00
ACTORES EXTRANJEROS	3,50

 **4,46**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

112.º de 193 países
24.º de 35 países americanos
3.º de 8 países de América Central

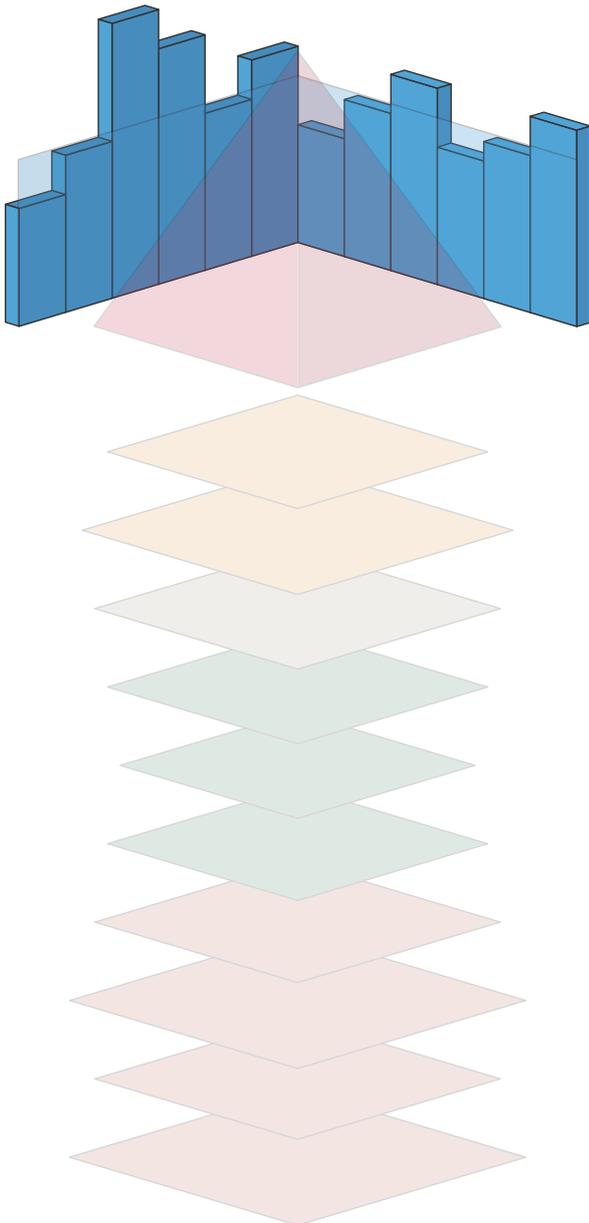


Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).

 **MÉXICO**



 **4,46**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

112.º de 193 países
24.º de 35 países americanos
3.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	3,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	7,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	4,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	3,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,50
PREVENCIÓN	4,00
ACTORES NO ESTATALES	5,00

 **7,56**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

4.º de 193 países
2.º de 35 países americanos
1.º de 8 países de América Central

 MERCADOS CRIMINALES	8,00
 ACTORES CRIMINALES	7,13



Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

México es un país de tránsito para la trata de personas, principalmente para víctimas centroamericanas que se dirigen al norte del continente. La trata sexual dentro de México y hacia Estados Unidos también es considerable. Las estrictas regulaciones fronterizas debido a la COVID-19 obstaculizaron las operaciones de trata a través de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que resultó en menos víctimas pero a un valor más elevado. Sin embargo, las restricciones internas no tuvieron un impacto significativo en el mercado local de México, ya que los cierres de emergencia se respetaron muy poco. Por el contrario, la pandemia exacerbó la colusión entre funcionarios corruptos y traficantes que se aprovechan de los migrantes mediante la participación forzada en economías criminales o la extorsión, con funcionarios que se valen más de los vínculos con el crimen organizado que del soborno para obtener ganancias.

El mercado del tráfico de personas de México es el más grande y sofisticado de la región, ya que se trata de un país grande que sirve de origen y tránsito, principalmente hacia los Estados Unidos. Aunque las políticas fronterizas cada vez más estrictas de Estados Unidos redujeron la demanda, los cierres por la COVID-19 exacerbaron la pobreza, el desempleo y la violencia en América Central, aumentando la migración irregular hacia los Estados Unidos a través de México, principalmente desde los países del Triángulo Norte. Según se informó, los traficantes de personas dejaron de operar a lo largo de ciertas áreas fronterizas al comienzo de la COVID-19, pero reanudaron sus actividades apoyándose en socios estadounidenses. El impacto del mercado sigue limitándose al área geográfica a lo largo de la frontera norte y en ciudades situadas a lo largo de la frontera sur. Los traficantes de personas del sur de México suelen ser miembros de la comunidad local, que transportan personas en automóviles, autobuses o remolques, mientras que los del noreste de México a menudo forman parte de grupos organizados más grandes que controlan redes de tráfico. Los traficantes de personas suelen tener vínculos con grupos criminales transnacionales, cárteles de la droga y funcionarios corruptos.

TRÁFICO

México tiene un mercado de tráfico de armas bien consolidado. Existe una gran demanda de armas de fuego de Estados Unidos y América Central por parte de los grupos criminales y la población civil y mecanismos bien establecidos facilitan el acceso a las mismas. En México no es posible adquirir armas de fuego legalmente, pero ciudadanos y cárteles de la droga compran armas de fuego estadounidenses y las pasan de contrabando a través de la frontera. El inmenso flujo de armas ilícitas provenientes de Estados Unidos, junto con granadas y lanzacohetes RPG-7 de América Central y la fuga de armas

de fuerzas de seguridad nacionales corruptas, exagera la violencia armada y el armamento criminal.

MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora y la fauna son importantes en México y los traficantes suelen estar activos en otros mercados criminales. Los traficantes de drogas controlan el tráfico de madera en Jalisco y obligan a las comunidades locales a pagar cuotas para su protección, mientras quienes protestan suelen ser víctimas de secuestro o desaparición. México es un país de origen y tránsito de productos de flora regional, especialmente entre Brasil y Estados Unidos. El mercado de madera ilícita ha crecido en las últimas tres décadas, afectando a las comunidades rurales. La mayor parte de la madera que se vende es de origen ilegal y genera cientos de millones de dólares al año. Existe un tráfico considerable de palo de rosa, controlado por mafias chinas y otros grupos que operan a nivel local y regional, y decenas de cargamentos dirigidos principalmente al mercado chino de muebles son incautados cada año en los puertos del Pacífico y la península de Yucatán. Existe violencia entre grupos criminales en competencia, mientras que las poblaciones locales, incluyendo las comunidades indígenas, son víctimas de violencia, desplazamiento y desapariciones a manos de grupos armados o cuerpos de seguridad corruptos.

Los delitos contra la fauna son facilitados por autoridades corruptas. Aunque tradicionalmente constituye un centro de tránsito para la fauna silvestre que se trafica a Estados Unidos, Europa, China y otros lugares, México también es un país de origen y destino. El mercado genera grandes ganancias y la demanda de fauna silvestre mexicana ha aumentado. Algunas de las especies buscadas incluyen jaguares, águilas reales, loros, guacamayos y reptiles. También se trafican peces totoaba principalmente hacia China continental, con la participación de la mafia china, y este comercio provoca una violencia especialmente visible a lo largo del Alto Golfo de California. Esta economía genera cientos de millones de dólares al año: un kilogramo de vejiga natatoria de totoaba es más valioso que su equivalente en cocaína. El comercio ilícito de pepinos de mar también es significativo en México, lo que genera violencia en los estados de Yucatán y Campeche.

Por otra parte, el robo de petróleo está aumentando en el país y existen algunos grupos dedicados exclusivamente a estas operaciones. Funcionarios corruptos de la petrolera estatal facilitan acuerdos entre ejecutivos petroleros y grupos criminales, lo que permite el robo y la consecuente redistribución de las ganancias ilícitas. También existe minería ilegal de oro y plata, y las empresas formales son víctimas de robos a mano armada, supuestamente por parte de cárteles, además de extorsión y secuestro de personal minero. Durante la pandemia de la COVID-19, las operaciones mineras se convirtieron en un objetivo fácil debido a la debilitada capacidad del Estado. Además, México es el único país del mundo que produce cinabrio, la forma color rojo vivo del mercurio, y los cárteles

trafican mercurio para su uso en los procesos de extracción ilícita de oro que prevalecen en los países sudamericanos.

DROGAS

La mayor parte de la heroína estadounidense se origina en México, particularmente en la región productora de drogas del Triángulo de Oro. El aumento de la demanda por parte de los consumidores de drogas estadounidenses, que pasaron del consumo de analgésicos recetados a la heroína callejera debido a la epidemia de opioides, provocó un aumento de la producción en México. Sin embargo, el aumento del cultivo de amapola real y el exceso de oferta están erosionando el valor de la pasta de amapola. Los cárteles mexicanos también desempeñan un papel en la producción y el transporte de metanfetamina y, cada vez más, de fentanilo. Su popularidad sigue aumentando en Estados Unidos, donde el fentanilo cobra decenas de miles de vidas al año. El fentanilo y sus precursores se producen principalmente en China y los cárteles mexicanos importan y trafican los productos hacia Estados Unidos, aunque también se producen a nivel nacional. El consumo de fentanilo está aumentando en México, ya que una parte importante de la heroína callejera, en forma de polvo blanco o de alquitrán negro, se combina con fentanilo para producir efectos más duraderos. No obstante, la COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro de fentanilo, obligando a los cárteles a buscar nuevas fuentes de ingresos.

Aunque el tráfico de cannabis entre América Central y Estados Unidos ha disminuido, México sigue siendo el mayor proveedor extranjero de Estados Unidos. Sin embargo, la legalización del cannabis en algunos estados de Estados Unidos y Canadá afectó significativamente el mercado de los cárteles mexicanos. Como dejó de ser un cultivo comercial importante, muchos agricultores están recurriendo al cultivo de amapola. En México existe actualmente un llamado a la legalización en medio de una creciente demanda interna de cannabis y productos de cannabis. El comercio de cocaína de México está menos consolidado debido a la fragmentación interna, pero el mercado es grande. Los actores mexicanos son intermediarios y transportistas clave y los cárteles están teniendo una participación más activa en las industrias de la cocaína en Colombia y Centroamérica. Gran parte de la violencia de los cárteles rivales se relaciona con el control de las rutas de envío hacia el norte.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El enfoque militarizado y de mano dura para combatir el crimen organizado ha producido resultados mixtos en México. La corrupción está muy extendida y provoca una colusión entre los cuerpos de seguridad, los jueces y los criminales.

ACTORES CRIMINALES

Las organizaciones de tráfico de drogas de México se encuentran entre los grupos de tipo mafioso más sofisticados del mundo. Aunque en la actualidad hay menos grupos con grandes operaciones internacionales debido a la fragmentación de los cárteles, los grupos que quedan tienen redes que abarcan la mayor parte de las Américas, e incluso llegan a Europa y Asia. Si bien las organizaciones de tráfico de drogas interactúan con actores extranjeros, estos generalmente carecen de un punto de apoyo significativo en México y su presencia suele estar relacionada con negocios colaborativos con grupos mexicanos. Las organizaciones de tráfico de drogas se centran en el tráfico internacional de drogas y generan miles de millones de dólares en ingresos anuales, pero también existen otras varias fuentes de ingresos profundamente arraigadas, como el robo de petróleo, la tala ilegal, la trata de personas, el secuestro y la extorsión. Los cárteles de la droga mexicanos poseen armas de fuego, incluyendo armas de grado militar, y existe un conflicto generalizado entre los grupos rivales y las fuerzas de seguridad del Estado. Algunos grupos exhiben cadáveres decapitados y mutilados para marcar su territorio. Los cárteles de la droga tienen control territorial en gran parte de México y cooptan el Estado mediante el soborno y la intimidación con el objetivo de facilitar la actividad ilícita e influir en el proceso democrático. Las mafias asesinan o amenazan con frecuencia a los políticos en un intento de asegurarse de que haya políticos cooperativos en los cargos.

La fragmentación de los cárteles ha dado lugar a grupos más pequeños, débilmente conectados, que carecen de una estructura de poder permanente y que son más difíciles de rastrear, lo que genera problemas de seguridad en un contexto en el que las guerras territoriales se vuelven más comunes y localizadas. Por lo general, estos grupos carecen de los recursos necesarios para gestionar redes de tráfico de drogas transnacionales y, en su lugar, se dedican a actividades como la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, el tráfico de petróleo, el tráfico y la trata de personas, la venta de drogas al por menor y la minería ilegal. También desempeñan un papel crucial en la cadena de suministro del narcotráfico, proporcionando transporte local o seguridad dentro de redes más amplias. Si bien los actores integrados en el Estado no controlan los mercados criminales, la corrupción dentro del Gobierno y los cuerpos de seguridad favorece a las redes criminales e influye en las actividades ilícitas, proporcionando ingresos a los funcionarios públicos de alto rango.

La violencia relacionada con el crimen organizado y la impunidad criminal han alcanzado niveles récord, con escaso acceso a procesos judiciales, mientras que las medidas adoptadas para frenar la corrupción y aumentar la transparencia carecen de implementación. No obstante, el acceso a la información sobre el marco legal parece sólido. El Gobierno carece de una

estrategia de seguridad coherente, y los intentos de abordar la corrupción y el crimen organizado se consideran altamente politizados o bien esfuerzos para avergonzar a gobiernos anteriores. El presidente está centralizando el control de las instituciones nacionales y ha propuesto nuevas políticas técnicamente ilegales, como que los marinos estén a cargo de las actividades aduaneras portuarias.

Las deficiencias estructurales en el sistema jurídico de México dificultan su capacidad para combatir el crimen organizado. Si bien el país ha ratificado una serie de tratados internacionales y cuenta con numerosas leyes relativas al crimen organizado, estas no se cumplen correctamente y se ven truncadas por la corrupción. Sin embargo, existe un historial de sólida cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, con acuerdos mutuos de extradición e intercambio de información por parte de agencias de inteligencia. A pesar de que el presidente ha sido flexible con Estados Unidos en temas como la migración, existe incertidumbre en torno al enfoque en materia de seguridad y crimen organizado.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

México cuenta con un cuerpo de seguridad y una unidad judicial encargados específicamente de combatir el crimen organizado. Sin embargo, la corrupción, la ineficiencia y la falta de investigación de casos debilitan las estructuras para el enjuiciamiento del crimen organizado. A pesar de la reciente reforma judicial, el país tiene dificultades para investigar y enjuiciar los delitos más graves. Los casos suelen depender demasiado de las declaraciones de un solo testigo, lo que permite a los fiscales manipular los resultados. Decenas de miles de personas se encuentran en prisión preventiva, lo que indica una importante deficiencia judicial en el procesamiento de los casos. No obstante, México ha realizado inversiones financieras y cambios estructurales para mejorar su capacidad en materia de aplicación de las leyes contra el crimen organizado, e importantes donaciones estadounidenses buscan mejorar el aparato de seguridad del país, así como brindar capacitación, inteligencia y planificación. Sin embargo, existe una corrupción sustancial dentro de la Policía y, en menor medida, en el Ejército, ambos acusados de abusos contra los derechos humanos. La confianza pública es baja, excepto en las Fuerzas Armadas. Cuando se ha detenido a los principales líderes de los cárteles, la fragmentación resultante ha llevado a la violencia.

La proximidad de México con Estados Unidos también lo convierte en un importante punto de tránsito para las drogas ilegales y en un centro para actividades como el tráfico de personas y de armas, que prosperan a pesar de los esfuerzos policiales bilaterales. Grandes extensiones de territorio y puertos son controladas por grupos organizados que operan por encima de la ley o en su lugar, actuando como poderes paralelos o de reemplazo. La Guardia Nacional del presidente, creada para aumentar la seguridad nacional y combatir el crimen organizado, está más enfocada en vigilar la migración irregular.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

México presenta un alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Si bien existe una ley en la materia, el lavado de dinero no se investiga ni se enjuicia de manera proactiva, particularmente en casos transnacionales, de modo que las tasas de condena son bajas. El Fiscal de Investigación Estratégica de Delitos Financieros de México ha encabezado algunas investigaciones importantes sobre lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos, pero algunas de estas investigaciones tuvieron una motivación política. El crimen organizado impulsa el lavado de dinero, mientras que la corrupción socava la capacidad de hacer cumplir la ley. Dado que las empresas son objeto de extorsión y secuestro, la corrupción es un riesgo importante para ellas y eso dificulta la atracción de inversores extranjeros. El Gobierno ha intentado tranquilizar a los inversores, pero aún no ha logrado infundir confianza.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Aunque existen algunos mecanismos para ayudar a las víctimas a salir de las formas contemporáneas de esclavitud, se necesitan más esfuerzos para mejorar los marcos de apoyo a las víctimas. Los programas de protección de testigos también son débiles. Si bien se han dedicado recursos a reducir la demanda de drogas y mejorar los programas de tratamiento, los esfuerzos por disuadir a los jóvenes de participar en el crimen organizado carecen de contenido. Algunos esfuerzos de participación comunitaria han tenido éxito, especialmente en los centros turísticos, pero aún no se han abordado las áreas donde el cultivo de drogas es un medio de subsistencia tradicional.

La protección de la sociedad civil sigue siendo débil y, debido a la falta de apoyo del Gobierno, no existen esfuerzos reales para promover una democracia fuerte e independiente con medios de comunicación independientes, ONG respetadas y protestas públicas pacíficas. Cientos de organizaciones sin fines de lucro activas se vieron afectadas por la cruzada del presidente contra la corrupción, que congeló el financiamiento federal a las organizaciones por acusaciones de corrupción y abuso. Los medios de comunicación son vistos como una amenaza y difamados por la administración, lo que ha propiciado la violencia de larga data en su contra y convierte a México en uno de los países más mortíferos para los periodistas. Los líderes de la sociedad civil reciben amenazas regularmente y los periodistas que cubren historias delicadas son amenazados, secuestrados o asesinados a sangre fría cuando no huyen al extranjero.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.